

Por qué el 11-M dividió a los españoles

Miércoles 11 de marzo de 2015. Publicado en El País.

Fernando Reinares es investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y Adjunct Professor de Estudios de Seguridad en la Universidad de Georgetown. Autor del libro *“¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España”* (Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2014) | @F_Reinares

Ver también versión en inglés: [Why did the Madrid train bombings divide, not unite Spaniards?](#)

Al contrario de lo que sucedió con la sociedad británica tras los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, los perpetrados el **11 de marzo de 2004** en Madrid dividieron profundamente a los españoles. Aún persisten secuelas de esa desunión, aunque con el tiempo sean menos manifiestas. Ha sido y es una discordia basada en diferentes atribuciones de culpa por la matanza en los trenes de Cercanías. Pero resultó ser una división espuria, derivada de una politización del 11-M que se prolongó con la comisión parlamentaria dedicada a esos atentados y más allá. Algo a su vez posible debido a especificidades del sistema político español –como su mayor tendencia a la polarización o la recurrente ausencia de consensos de Estado en Asuntos Exteriores, Defensa o antiterrorismo- y, sobre todo, porque los ciudadanos no eran conscientes de la amenaza de un fenómeno terrorista instalado en nuestra sociedad una década antes del 11-M.

Unos españoles, ubicados sobre todo en la derecha del espectro político, creyeron, y aún en parte siguen pensando, que los atentados de Madrid fueron de uno u otro modo obra de la organización terrorista **ETA**. La formulación más habitual de este argumento aduce que los denominados *moritos de Lavapiés* – una manera extravagante de aludir a quiénes constituyeron la red terrorista del 11-M- carecían de los conocimientos y las capacidades para llevar a cabo lo ocurrido el 11 de marzo de 2004. Por eso, aunque se tratara de individuos que participaron en los hechos, tuvieron que haber sido instigados y apoyados desde el interior de nuestro país por otros terroristas con experiencia. A menudo, a este argumento se añaden especulaciones sobre el modo en que el presidente del Gobierno que el PSOE formó tras el resultado de las elecciones celebradas tres días después del 11-M, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció a ETA una salida de transformación en lugar de optar por derrotarla.

Otros españoles, situados preferentemente a la izquierda del mismo espectro político, pensaron, y no pocos aún creen, que los atentados del 11 de marzo de 2004 fueron una consecuencia de la llamada *foto de las Azores* –en alusión a

la instantánea tomada el 16 de marzo de 2003 en una de esas islas del Atlántico y que hizo visible el alineamiento del presidente del Gobierno español, José María Aznar, con la guerra al terrorismo auspiciada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush- y el posterior despliegue de tropas españolas en **Irak** inmediatamente después de haber sido invadido este país y derrocado el dictador Sadam Hussein. No ha sido inusual que desde este sector social se critique al entonces Ejecutivo del Partido Popular por haber insistido en asociar a ETA con el 11-M, incluso cuando la evidencia apuntaba en otra dirección, para mantener así sus expectativas electorales ante los comicios generales que se celebraron sólo tres días después de los atentados.

En realidad, ambas interpretaciones sobre el 11-M eran erróneas y la lacerante división en que se sumieron los españoles, incluidas las propias víctimas, ha sido y es engañosa. Ninguna evidencia hay, directa o indirecta, de que la organización terrorista ETA estuviese implicada en los atentados. Tampoco es cierto que la idea de perpetrar una matanza en Madrid surgiera a raíz de la presencia de soldados españoles en territorio iraquí. Como explico y documento en el libro *¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España*, la decisión de ejecutar ese acto de terrorismo se tomó en diciembre de 2001 en la ciudad paquistaní de Karachi y fue ratificada durante una reunión que delegados de tres organizaciones yihadistas magrebíes mantuvieron en Estambul en febrero de 2002. Además, lo que se convertirá en la red del 11-M inició su formación al mes siguiente, todo ello más de un año antes de la invasión de Irak.

Pero no hacía falta investigar los atentados del 11-M ni desvelar nueva información sobre los mismos para evitar la división de los españoles, aunque hacerlo haya contribuido a mitigarla. Bien pudo haber bastado con que, como ocurría con los británicos, los españoles hubiéramos estado lo suficientemente sensibilizados respecto a la amenaza del terrorismo yihadista que, además de la relacionada con ETA, se cernía sobre nuestro país con anterioridad a la invasión y ocupación de Irak. Desde al menos 1997, los informes que la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) del Cuerpo Nacional de Policía remitía a los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, quienes debían autorizar escuchas telefónicas relacionadas con los yihadistas que desarrollaban ya actividades en España, dejaban constancia de que sus investigaciones eran necesarias para “prevenir la muy posible comisión de atentados en nuestro país”.

Al presentar *¡Matadlos!* a lo largo del último año en numerosas ciudades españolas he podido constatar cómo, incluso entre los ciudadanos interesados y que eran adultos cuando se perpetraron los atentados de Madrid, existía un gran desconocimiento sobre la trayectoria del **yihadismo** en nuestro país desde mediada la pasada década de los noventa. Casi nadie –o muy pocos- sabía que **al-Qaeda** fundó en España, en 1994, una de sus más importantes células en Europa Occidental, desmantelada en noviembre de 2001 al quedar de manifiesto su conexión con la responsable de los atentados del 11-S. Como

casi nadie –o muy pocos- eran conscientes de que sólo a lo largo de 2003, el año anterior al del 11-M, se detuvo en nuestro país a más de cuarenta individuos por su implicación en actividades de terrorismo yihadista. Esta cifra nunca antes había sido tan elevada desde que, en 1995, fuese detenido en Barcelona el primer yihadista o desde que, en 1997, se desarticulara en Valencia la primera célula yihadista.

El desconocimiento de estos y de otros muchos episodios relacionados con la [evolución del terrorismo yihadista en España](#) a lo largo del decenio que precedió a los atentados de Madrid, así como el hecho de que no fuera percibido como amenaza por parte de la opinión pública española hasta muy tardíamente, y sólo cuando se inició la crisis iraquí en 2002, se explican en parte por la obligada atención que suscitaba el frecuente terrorismo de ETA. Pero no hubo una adecuada pedagogía política sobre el problema e incluso se llegó a trivializar su peligrosa realidad –¿hay que recordar aquello de la *Operación Dixán*?-. Consecuencia de todo ello fue que, cuando se produjo el 11-M, los españoles buscaron interpretar la matanza terrorista en los trenes de Cercanías enmarcándola en lo conocido al no poder hacerlo en relación a lo que les era desconocido. Lo conocido era, por una parte, ETA y, por la otra, Irak.

Si el 11-M nos dividió es que los españoles carecimos como sociedad de la necesaria resiliencia ante atentados terroristas de gran magnitud, más allá de la gestión de crisis y emergencias. En la actualidad, cuando el [yihadismo global](#) se encuentra más extendido que nunca y la amenaza del terrorismo que lo caracteriza no ha sido tan elevada para las democracias liberales desde el 11-S, que España sea menos vulnerable a la par que más consciente y resiliente, tanto frente a la penetración de los actores y la ideología asociados con dicho fenómeno, como ante cualesquiera eventuales nuevas expresiones de su violencia contra nuestros ciudadanos e intereses, continúa siendo [una tarea pendiente](#) para las élites políticas y el conjunto de nuestra sociedad civil, en especial los medios de comunicación.